

Exp.4361/2019

INFORME DE INTERVENCION 292/2019

Asunto: Liquidación del Presupuesto general del ejercicio económico de 2018.

Vistos por esta Intervención los documentos relativos a la Liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento de Torrent, correspondiente al ejercicio económico de 2018, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 213 y siguientes, respecto a las funciones de control interno y fiscalización, así como lo dispuesto en el artículo 191.3, todos ellos del Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y el artículo 90.1 del Real Decreto 500/1990, la funcionaria que suscribe, en el ejercicio de la función de control financiero emite el siguiente **INFORME**:

1. La Liquidación presupuestaria viene referida al Ayuntamiento y a los organismos autónomos dependientes: la Fundación Deportiva Municipal, el Consell Agrari Municipal y la Junta Local Fallera, que presentan informe de la intervención independiente y que se acompaña en el expediente. De igual forma se adjunta para su aprobación la liquidación de los Consorcios adscritos al Ayuntamiento de Torrent: Consorcio Xarxa Joves Net y Consorcio Gestión L'horta. La intervención de la FDM está delegada en un funcionario, por lo que a esta intervención únicamente le corresponde el control financiero del mismo, al igual que los Consorcios.
2. Tramitación. La preparación de los estados que conforman la liquidación del presupuesto es un procedimiento que tiene regulación específica dentro de la propia ley de haciendas locales, con independencia que dichos documentos forman parte de la cuenta general de la entidad. A este respecto se establecen las siguientes obligaciones (artículos 191 y 193 del TRLRHL):
 - A) En primer lugar, **la confección** de la liquidación del presupuesto debe realizarse antes del 1 de marzo del ejercicio siguiente a aquel que viene referido.
 - B) La **aprobación** de la liquidación corresponde al presidente de la entidad local. En nuestro caso dicha facultad se encuentra delegada en el Teniente de Alcalde, Delegado del Área de Gestión de Recursos y Modernización, previo informe del interventor.
 - C) Una vez realizada la aprobación de la liquidación del Presupuesto, junto con el resto de liquidaciones de cada uno de los presupuestos que

integran el Presupuesto General (en el caso de Torrent queda integrada por la liquidación de los organismos autónomos: la Fundación Deportiva Municipal, el Consell Agrari Municipal y la Junta Local Fallera), y de los estados financieros de las sociedades mercantiles dependientes de la entidad, se dará cuenta al Pleno en la primera sesión que celebre.

Desde la entrada en vigor del Real Decreto 424/2017 el interventor debe, en virtud de lo dispuesto en el artículo 15.6 y 27.2 del RCIL, dar cuenta al pleno, junto con la liquidación del presupuesto, del informe anual de todas las resoluciones adoptadas por el presidente de la entidad local contrarias a los reparos efectuados o de la opinión del órgano de tutela financiera, y las anomalías en materia de ingresos, más el informe de control de los PAJ y ACF de conformidad con el artículo 15.6 y 27.2 del RCIL.

Las entidades locales remitirán copia de la liquidación de sus presupuestos a la Administración del Estado y a la Comunidad Autónoma antes de finalizar el mes de marzo del ejercicio siguiente al que corresponda. La falta de remisión de la liquidación en el plazo señalado facultará a la Administración para utilizar como actuales, a cualquier efecto, los datos que conozca relativos a la entidad de que se trate, artículo 36 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible.

Cabe mencionar una previsión respecto a la regulación contenida en el artículo 193, punto 4 del TRLRHL, pues en la práctica los estados financieros de las sociedades mercantiles deben formularse ante el Consejo de Administración, con anterioridad al 31 de marzo del ejercicio siguiente al que corresponda, de conformidad con lo previsto en la legislación mercantil, lo que implica que una vez formuladas las mismas y aprobadas por la junta general de accionistas se deba, igualmente, dar cuenta al Pleno de la entidad local. En la práctica, las cuentas anuales de las sociedades mercantiles que integran el presupuesto general, forman parte de la cuenta general, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 209 del TRLRHL.

Es decir, antes de 31 de marzo se deberá aprobar la liquidación correspondiente al Ayuntamiento y a los organismos autónomos dependientes, que cuentan con presupuesto limitativo, debiendo dejar para un momento posterior, la dación de cuentas de las sociedades mercantiles dependientes de la entidad local, las cuales se formularán ante el consejo de administración con anterioridad a 31 de marzo.

Por otra parte, y con el fin de facilitar a todas las entidades locales la transmisión de toda esta información, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas pone a su disposición una aplicación telemática, accesible a través de la oficina virtual de coordinación financiera con las entidades locales, en el portal de Internet del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

Recae en el Interventor, o en su caso, en el titular del órgano que tenga atribuida la función de contabilidad, la responsabilidad de transmitir esta información, dándole validez mediante su firma electrónica (Orden OM EHA/468/2007). Del contenido de esta Orden, en su artículo 4, se desprende que la liquidación del presupuesto debe remitirse una vez aprobada.

En consecuencia, y para que en la práctica puedan cumplirse todas las obligaciones expuestas, la tramitación de la liquidación sigue el siguiente trámite:

- a) El interventor u órgano que tenga atribuida la función de contabilidad confecciona la liquidación antes del 1 de marzo, preparando el oportuno expediente administrativo.
- b) La intervención emitirá el informe sobre la liquidación antes que el Presidente de la entidad pueda aprobar la misma. Debe emitirse también el informe de estabilidad presupuestaria con carácter consolidado para el conjunto de entidades que integran el sector público de Torrent, y que comprenderá además un análisis del estado de la deuda. En este supuesto, el informe únicamente va referido a los entes con presupuesto limitativo (Ayuntamiento, Fundación Deportiva, Consell Agrari Municipal, Junta Local Fallera, y los dos Consorcios adscritos). El resto de entidades que integran el perímetro de consolidación como son Retosa e Ideat serán objeto del informe de estabilidad una vez se aprueben sus cuentas anuales por la Junta General de Accionistas.
- c) En el caso del municipio de Torrent, la función de contabilidad la tiene atribuida el Interventor General, y, en consecuencia, la confección de la liquidación. No obstante, hay que tener en cuenta que Torrent es un municipio de gran población, y como tal su régimen de organización y funcionamiento queda regulado en el Título X de la Ley 7/1985, en concreto en su artículo 133, que señala como criterios a seguir en la gestión económica financiera, entre otros (letra b), la separación de las funciones de contabilidad y fiscalización de la gestión económico financiera, para señalar en su apartado h) que el ámbito en que se ejerce el control y fiscalización interna, lo constituye cualquier documento, acto y expediente de la administración municipal como de sus entidades dependientes, sea cual fuera su naturaleza jurídica, de los que se deriven derechos y obligaciones de contenido económico. Por tanto, deben estar separadas las funciones de contabilidad y de fiscalización, que no pueden atribuirse al mismo órgano, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 133 letra b) de la LBRL.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS.

1ª. El Título X de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local -LRBRL-, dedicado al régimen de organización de los municipios de gran población, se introdujo por la Ley 57/2003, de 16 de

diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local -LMMGL. La Exposición de Motivos de esta Ley justifica la nueva organización de la gestión económico financiera, estableciendo que:

“Los principios de la citada gestión en los municipios a que se refiere esta ley, previendo la creación de uno o varios órganos para el ejercicio de las funciones de presupuestación, contabilidad, tesorería y recaudación, y atribuyendo en todo caso la función pública del control y la fiscalización interna de la gestión económica y presupuestaria a la Intervención general municipal. Esta separación y redistribución de funciones trata de ofrecer una respuesta a la complejidad que las mismas presentan en estos municipios, lo que hace aconsejable la adopción de este nuevo modelo.

Tanto el titular de la Intervención general como el del órgano u órganos que desarrollen las funciones de contabilidad, tesorería y recaudación deben ser funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional, respetando el consolidado criterio tradicional de funciones reservadas por razones de interés supralocal a los funcionarios de esta Escala.”

A esta situación de mayor complejidad que se presume en los municipios de gran población, se une, la tendencia normativa y doctrinal de que el Interventor tiene que limitarse a fiscalizar, sin que pueda intervenir en la gestión municipal, porque no puede “contaminarse” de la gestión que tiene que fiscalizar. La fiscalización tiene que ser objetiva y técnica, por lo que es imprescindible que el Órgano fiscalizador no gestione lo que él tiene que fiscalizar.

Por ello, entre otras cosas y para que el Interventor se centre en las labores de fiscalización, debe separarse de las funciones la de contabilidad.

Así, el art. 133.f) LRBRL, en la redacción dada por la LMMGL, dispone que:

“La gestión económico-financiera se ajustará a los siguientes criterios:

(...) b) Separación de las funciones de contabilidad y de fiscalización de la gestión económico-financiera.”

2ª A nuestro juicio, los términos de la disposición transcrita no deja lugar a dudas: **la separación de las funciones de contabilidad y de fiscalización es un criterio obligatorio para los municipios sujetos al régimen jurídico de gran población.** De tal manera que no es posible que el Reglamento Orgánico contenga una disposición que atribuya al Interventor las funciones de contabilidad, porque sería contrario a los criterios señalados por la Ley, si bien es cierto que el Reglamento parece referirse a que se trata de una situación transitoria hasta que se produzca el nombramiento de los titulares respectivos. No obstante, entendemos que no cabe dicha transitoriedad, y desde la aplicación de la norma debe necesaria e inexcusablemente separarse, cubriendo el puesto de trabajo de contabilidad mediante las formas de provisión

que establece el RD 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional -RJFHN- .

- a) Únicamente le corresponde informar la liquidación en uso de las funciones de control financiero que tiene atribuidas por ley,
 - b) El presidente de la entidad resolverá mediante decreto la aprobación de la liquidación.
 - c) La norma legal no fija expresamente el plazo para emitir el informe de intervención, ni cuándo debe estar aprobado por el presidente. No obstante, si se ha de remitir al Estado y a la Comunidad Autónoma antes de finalizar el mes de marzo, resulta que la misma debe aprobarse e informarse antes del 31 de marzo.
 - d) El interventor remitirá telemáticamente al Ministerio y a la Comunidad Autónoma la liquidación del presupuesto antes de finalizar el mes de marzo.
 - e) En el primer Pleno que se celebre tras la resolución de la Presidencia se deberá dar cuenta de la misma (como cualquier otro decreto), siendo recomendable que conste en acta los suficientes datos identificativos de que la dación del decreto se refiere a la liquidación efectivamente aprobada.
- 3.** La liquidación presentada contiene los estados a los que hace referencia la nueva instrucción de contabilidad para la Administración Local, aprobada por la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre por la que se aprueba la instrucción del modelo normal de contabilidad local, respecto a las operaciones de fin de ejercicio, cierre del presupuesto y cierre de la contabilidad. Los remanentes de crédito comprometidos y no comprometidos, así como el estado de gastos con financiación afectada, se adjuntan como anexos a este expediente. La evaluación del principio de estabilidad presupuestaria para el perímetro de consolidación del sector público de Torrent, como el correspondiente al destino del superávit serán objeto de informe separado, una vez se hayan aprobado las cuentas anuales por la Junta General de Accionistas de las sociedades mercantiles dependientes.

La nueva instrucción elimina las reglas específicas que regulaban las magnitudes de carácter presupuestario que resultan de la liquidación del presupuesto. No obstante, éstas se trasladan a la Tercera Parte “Cuentas Anuales” del Plan de Cuentas anexo a la nueva instrucción de contabilidad. En concreto, la regulación del resultado presupuestario se traslada a las normas de elaboración del Estado de Liquidación del Presupuesto, y la regulación del remanente de tesorería al apartado 24.6 de la memoria.

- 4.** Sin perjuicio de lo anterior, el citado precepto del decreto presupuestario exige que se determinen, además de los anteriores:

Los derechos pendientes de cobro y obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre, correspondientes a presupuestos cerrados. Estos datos aparecen concretados en la documentación preparada por esta Intervención y que aparece en los estados demostrativos de Presupuestos cerrados que forman parte de la memoria incluida en la cuenta general y que ascienden a **16.836.277,91€** (derechos pendientes de cobro de ejercicios cerrados) y **482.896,02€** (obligaciones pendientes de pago de ejercicios cerrados), respectivamente.

No obstante, y con respecto a la liquidación del presupuesto, el remanente de tesorería recoge el cálculo de los derechos pendientes de cobro a fin de ejercicio, distinguiendo los del presupuesto corriente y los de presupuestos cerrados, así como las obligaciones pendientes de pago. A este respecto se ha dotado el dudoso cobro, adoptando las previsiones contenidas el artículo 193 bis del TRLRHL, artículo que regula (con la entrada en vigor de la ley 27/2013, de racionalización y sostenibilidad local) los derechos de cobro de difícil o imposible recaudación en función de la antigüedad de los mismos, así como lo dispuesto en las bases de ejecución del presupuesto (base 44).

De este modo, el importe del mismo asciende a **10.939.463,68 €**.

5. De conformidad con los estados de la liquidación propiamente dichos, a tenor del artículo 93 del RD 500/1990, se pone de manifiesto:

Respecto al presupuesto de gastos, a nivel de capítulo:

PRESUPUESTO DE GASTOS A NIVEL DE CAPÍTULO

CAPÍTULOS	C. INICIAL	MODIFICAC.	C. DEFINIT.	O.R.N.	%-1	PAGOS	%-2
1. Gastos personal	18.985.787,57	971.638,87	19.957.426,44	17.994.883,67	90,17	17.994.684,15	99,99
2. Bienes corrientes	18.977.608,11	3.647.126,80	22.624.734,91	20.083.387,30	88,77	18.937.132,85	94,29
3. Gastos financieros	1.240.689,88	-290.000,00	950.689,98	900.193,31	94,69	900.193,31	100,00
4. Transferencias corrientes	8.843.387,45	-516.804,64	8.326.582,81	7.515.778,84	90,26	6.791.785,67	90,37
5. Fdo. Contingencia	100.000,00	-27.060,17	72.939,83	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Inversiones reales	252.000	16.863.777,41	17.115.777,41	2.321.313,62	13,56	2.027.086,48	87,32
7. Transferencias de capital.							
8. Activos financieros.	0,00	71.092,50	71.092,50	60.685,40	85,36	60.685,40	100,00
9. Pasivos financieros	3.495.20,83	-10.000,00	3.485.204,83	3.367.995,18	93,39	3.367.995,18	100,00
	51.894.677,84	20.709.770,77	72.604.448,61	52.244.237,32	71,96	50.235.266,11	96,15

Respecto al presupuesto de ingresos, a nivel de capítulo:

PRESUPUESTO DE INGRESOS A NIVEL DE CAPÍTULO

CAPÍTULOS	P. INICIAL	MODIFICAC.	P. DEFINIT.	D.R.N.	%-1	COBROS	%-2
1. Impuestos directos	30.053.538,34	0,00	30.053.538,34	33.861.883,00	112,67	28.650.792,47	84,61
2. Impuestos indirectos	1.950.578,54	0,00	1.950.578,54	3.522.897,03	180,61	3.289.629,68	93,38
3. Tasas y otros ingresos	3.807.305,87	7.111,88	3.814.417,75	3.864.346,59	101,31	3.335.063,62	86,30
4. Transferencias corrientes	15.607.781,38	3.558.332,27	19.166.113,65	17.550.707,00	91,57	17.550.707,00	100,00
5. Ingresos patrimoniales	1.008.138,94	0,00	1.008.138,94	1.158.781,72	114,94	913.005,84	78,79
6. Enajenación Inv. Reales				35.715,58		35.715,58	100,00
7. Transferencias de capital.	0,00	5.468.483,30	5.468.483,30	587.590,34	10,75	587.590,34	100,00
8. Activos financieros	165.656,93	9.045.843,31	9.211.500,23	114.729,88	1,25	71.138,02	62,00
9. Pasivos financieros	0,00	2.630.000,00	2.630.000,00	2.630.000,00	100,00	2.630.000,00	100,00
	52.593.000,00	20.709.770,76	73.302.770,76	63.326.651,14	86,39	57.063.642,55	90,11

Respecto los activos financieros del presupuesto de ingresos, añadir que los derechos reconocidos son inferiores a los créditos definitivos, ya que, con cargo al remanente de tesorería procedente de la liquidación del presupuesto de 2017, se modifica presupuesto en el 2018, sin que se reconozca el derecho en contabilidad, por así disponerlo expresamente la instrucción de contabilidad modelo normal. De ahí que su importe siempre sea menor.

Respecto al capítulo 9 del presupuesto de gastos, se recoge la modificación de créditos número 49/2018/CE-SC/02 en la modalidad de crédito extraordinario y suplementos de crédito, por importe de 2.630.000,00 €, financiados con una operación de endeudamiento a largo plazo destinada a inversiones, aprobada por el Pleno de la corporación en sesión extraordinaria celebrada el 31 de mayo de 2018.

(1) Este porcentaje, representa el grado de ejecución de ingresos y gastos respecto a las previsiones definitivas del presupuesto.

(2) Este porcentaje representa el grado de realización de pagos y cobros respecto a las obligaciones y derechos reconocidos en el ejercicio.

6. Respecto a los derechos pendientes de cobro y obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre de 2018.

De acuerdo con el artículo 94 del RD 500/90, los derechos pendientes de cobro y las obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre integrarán la agrupación de presupuestos cerrados y tendrán la consideración de operaciones de tesorería local.

1.- OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE.

Obligaciones reconocidas de corriente.

Pendiente de pago.

EJERCICIO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PENDIENTE DE PAGO	%
Corriente	52.244.237,32	2.168.152,11	4,15%
Cerrado		482.896,02	

2.- DERECHOS RECONOCIDOS NETOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE.

Derechos reconocidos netos.

Pendientes de cobro.

EJERCICIO	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	PENDIENTE DE COBRO	%
Corriente	63.326.651,14	6.263.008,59	9,89%
Cerrado		16.836.277,91	

7. Resultado presupuestario del ejercicio.

Esta magnitud determina en qué medida los ingresos reconocidos durante el ejercicio han sido suficientes para financiar los gastos. En ambos casos se refieren a ingresos y gastos del presupuesto, en términos netos, no se tiene en cuenta los ingresos y gastos de carácter no presupuestario, de conformidad con el artículo 96 del RD 500/1990.

De conformidad con el artículo 97 del RD 500/1990, el resultado presupuestario debe ajustarse:

1.- Las desviaciones de financiación negativas imputables al ejercicio 2018 se ajustan con signo positivo, ascienden a **2.702.725,11€**.

2.- De forma inversa, se ha realizado un ajuste negativo por los importes

de las desviaciones de financiación positivas imputables a ese mismo ejercicio económico, y relativas a los mismos gastos de financiación afectada, que asciende a **3.063.359,07€** y que se trata dentro del estado de gastos con financiación afectada, de las desviaciones del ejercicio 2018.

3.- Las obligaciones reconocidas con cargo al remanente de tesorería para gastos generales ajustan el resultado presupuestario al alza porque suponen un mayor gasto financiado por un ingreso que no se reconoce en el presupuesto (**418.875,35€**).

Las desviaciones de financiación surgen como consecuencia de los proyectos de gastos con financiación afectada. En el caso de que los ingresos afectados no se produzcan de forma acompasada con los gastos que se vayan realizando surgen las desviaciones de financiación. Éstas, a su vez, pueden ser positivas o negativas, es decir que los ingresos sean superiores a los gastos que les corresponda o viceversa. En ambos casos sólo se toman en consideración las imputables al ejercicio.

Se ha de señalar que los gastos con financiación afectada, se integran como parte de los documentos de la liquidación, y que se unen como anexo a este expediente.

AYUNTAMIENTO DE TORRENT EJERCICIO 2018
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	59.958.615,34	46.494.243,12		13.464.372,22
b. Otras operaciones de capital	623.305,92	2.321.313,62		-1.698.007,70
c. Total operaciones no financieras (a+b)	60.581.921,26	48.815.556,74		11.766.364,52
d. Activos financieros	114.729,88	60.685,40		54.044,48
e. Pasivos financieros	2.630.000,00	3.367.995,18		-737.995,18
f. Total operaciones financieras (c+d)	2.744.729,88	3.428.680,58		-683.950,70
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	63.326.651,14	52.244.237,32		11.082.413,82
AJUSTES:				
3.(+) Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			418.875,35	
4.(+) Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			2.702.725,11	
5.(-) Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			3.063.359,07	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			58.241,39	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO				11.140.655,21
(-) Devoluciones de Ingresos Sin Aplicar a Presupuesto				
(-) Obligaciones Sin Aplicar a Presupuesto				606.692,35
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO PERIODIFICADO				10.533.962,86

Todo ello supone un resultado presupuestario positivo de **11.082.413,82€**, el resultado presupuestario después de ajustes es positivo y asciende a **11.140.655,21€**.

8. Remanentes de Crédito.

Los remanentes de crédito representan los créditos no gastados durante el ejercicio. Así, el artículo 175 del TRLRHL determina la anulación de los créditos que al final del ejercicio no estén afectados al cumplimiento de obligaciones, con las excepciones del artículo 182 del TRLRHL, que permite la incorporación en determinados casos de los créditos no gastados al presupuesto siguiente.

Capítulo	C.DEFINIT. (1)	O.R.N. (2)	Remanentes de crédito (1)-(2)
1.Gastos personal	19.957.426,44	17.994.883,67	1.962.542,77
2. Bienes corrientes	22.624.734,91	20.083.387,30	2.541.347,61
3.Gastos financieros	950.689,88	900.193,31	50.496,57
4.Transferencias corrientes	8.326.582,81	7.515.778,84	810.803,97
6.Inversiones reales	17.115.777,41	2.321.313,62	14.794.463,79
7.Transferencias de capital.			
8.Activos financieros.	71.092,50	60.685,40	10.407,10
9.Pasivos financieros	3.485.204,83	3.367.995,18	117.209,65
Total general.	72.604.448,61	52.244.237,32	20.360.211,29

El seguimiento y detalle de los remanentes de crédito y su clasificación en remanentes incorporables, que incluye los gastos financiados con ingresos afectados, así como el saldo de los créditos comprometidos se adjuntan en la información presupuestaria del expediente. Se ha de advertir que el seguimiento y detalle individualizado de los remanentes incorporables con ingresos afectados se realizan por la oficina presupuestaria. Y los ingresos que financian los remanentes constituyen el RTGFA (870) y no el concepto de ingreso que lo financió en su día.

Los remanentes de crédito correspondientes a proyectos de gastos con financiación afectada, parte se incorporan con cargo a los excesos de financiación y otra parte a los compromisos firmes de aportación. También se incorporan los remanentes de crédito de las IFS del ejercicio 2018 con cargo al RTGG.

9. Remanente de Tesorería

El remanente de tesorería es una variable fondo, que muestra en un momento determinado (31 de diciembre) el superávit o el déficit acumulado a lo largo de distintos ejercicios, siendo un recurso para financiar modificaciones presupuestarias si es positivo, o un déficit a financiar si es negativo. Con la actual normativa de estabilidad presupuestaria, el régimen jurídico de las modificaciones presupuestarias financiadas con Remanente de Tesorería puede condicionar el cumplimiento de la regla de gasto. No obstante, el destino del mismo, tal y como se ha indicado, será objeto de estudio en informe independiente.

El cálculo del remanente de tesorería se ha efectuado de conformidad con lo dispuesto en la nueva ICAL, estando integrado por los fondos líquidos, los derechos pendientes de cobro, las obligaciones pendientes de pago y las

partidas pendientes de aplicación, todo ello referido a 31 de diciembre, tanto por operaciones presupuestarias como no presupuestarias.

El remanente de tesorería para gastos generales se calcula por la diferencia del remanente de tesorería total minorada por:

1. Las desviaciones de financiación positivas y acumuladas que constituyen el remanente de tesorería para gastos con financiación afectada y que financian la incorporación de remanentes de tales créditos, según la regla 29.5 de la nueva instrucción de contabilidad. Se adjunta estado de gastos con financiación afectada.
2. Respecto a los derechos de difícil o imposible recaudación se han calculado de acuerdo con los porcentajes previstos en el artículo 193 bis del TRLRHL y las bases de ejecución del presupuesto (base 44), adoptando un criterio de prudencia e incluyendo en el mismo los DRN pendientes de cobro de los capítulos 4 y 7.

El importe de los derechos pendientes de cobro de difícil o imposible recaudación viene dado por la parte del saldo de la cuenta 490, provisión para insolvencias, que corresponda a derechos de carácter presupuestario o no presupuestario incluidos en el citado remanente de tesorería, ascendiendo a **10.939.463,68€**.

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

COMPONENTES	IMPORTES 2018		IMPORTES 2017	
1. (+) Fondos líquidos		13.754.258,38		4.231.417,96
2. (+) Derechos pendientes de cobro		23.202.067,59		24.546.264,64
(+ del presupuesto corriente	6.263.008,59		5.235.812,46	
(+ de Presupuestos cerrados	16.836.277,91		19.104.777,19	
(+ de operaciones no presupuestarias	102.781,09		205.674,99	
3. (-) Obligaciones pendientes de pago		5.780.677,96		5.497.333,00
(+ del presupuesto corriente	2.168.152,11		1.867.322,40	
(+ de Presupuestos cerrados	482.896,02		481.807,99	
(+ de operaciones no presupuestarias	3.129.629,83		3.148.202,61	
4. Partidas pendientes de aplicación		-2.167.690,31		-2.434.372,49
(-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	2.175.537,96		2.444.098,85	
(+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	7.847,65		9.726,36	
I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)		29.007.957,70		20.845.977,11
II. Saldo de dudoso cobro		10.939.463,68		11.816.397,58

III. Exceso de financiación afectada	6.709.356,88		4.381.287,67
Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III)	11.359.137,14		4.381.287,67
Revoluciones de Ingresos Sin aplicar a Presupuesto			
(-) Obligaciones Sin Aplicar a Presupuesto	388.892,35		103.042,99
Remanente de tesorería para gastos generales AJUSTADO	10.970.244,79		4.545.248,67

Respecto al destino del Remanente de Tesorería para gastos generales hay que ponerlo en relación con lo dispuesto en el artículo 32 de la LOEPYSF y la DA 6ª de la misma, y es objeto de estudio en informe separado, una vez calculado las reglas fiscales correspondientes a la capacidad de financiación, la regla de gasto y el límite de la deuda con carácter consolidado.

La incompleta definición del artículo 32 hizo necesario que en la modificación del artículo 32 de la Ley orgánica 9/2013, se especificará este aspecto incluyendo en el párrafo 3 la redacción:

“3. A efectos de lo previsto en este artículo se entiende por superávit la capacidad de financiación según el sistema europeo de cuentas.”

No obstante, como el concepto de superávit presupuestario es una magnitud de carácter consolidado, habrá que esperar a la aprobación de las cuentas anuales del resto de entidades que pertenecen al perímetro de consolidación para evaluar esta magnitud y compararla en su caso con el remanente de tesorería.

10. Otras cuestiones.

Desde la entrada en vigor del Real Decreto 424/2017 el interventor debe, en virtud de lo dispuesto en el artículo 15.6 y 27.2 del RCIL, dar cuenta al pleno, junto con la liquidación del presupuesto, del informe anual de todas las resoluciones adoptadas por el presidente de la entidad local contrarias a los reparos efectuados o de la opinión del órgano de tutela financiera, y las anomalías en materia de ingresos más el informe de control de los PAJ y ACF de conformidad con el artículo 15.6 y 27.2 del RCIL .

Con respecto al cálculo de las magnitudes relativas al endeudamiento, que requiere analizar los ratios comprendidos en el artículo 53 del TRLRHL, así como el periodo medio de pago, son objeto de estudio en el informe de intervención sobre la estabilidad presupuestaria.

Resta añadir que el periodo medio de pago global se sitúa en **5,55** días, con respecto a los datos referidos al mes de diciembre de 2018, y remitidos de forma telemática a la OVEELL (que se deducen de los informes de morosidad de intervención y tesorería correspondientes al cuarto trimestre de 2018).

Respecto del saldo de las obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto, que integran el saldo de la cuenta 413, asciende a **388.892,35 €**, que serán objeto de aprobación mediante el expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos en el ejercicio 2018.

Respecto a la liquidación del organismo autónomo Fundación Deportiva Municipal esta intervención tiene que puntualizar que la función interventora se encuentra delegada en un funcionario municipal, y a esta intervención general únicamente le corresponde el control financiero, al igual que ocurre con los dos Consorcios adscritos. Dada la insuficiencia de medios materiales y humanos, esta Intervención no puede realizar el control financiero sobre los organismos autónomos, y en concreto de las subvenciones que se otorgan, al tiempo que lleva un retraso importante en la fiscalización plena. Se ha realizado la correspondiente al ejercicio 2016 Y 2017, y no se ha podido comenzar con la del ejercicio 2018, debido a las circunstancias anteriormente citadas. Resulta necesario pues referirse a ello por la conveniencia de realizarla con la colaboración externa, a través de auditorías.

11. Otras cuestiones.

Respecto al análisis de medios, el artículo 4.3 del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen de control interno en las entidades del Sector Público Local establece: *“El órgano interventor dispondrá de un modelo de control eficaz y para ello se le deberán habilitar los medios necesarios y suficientes.*

A estos efectos el modelo asegurará, con medios propios o externos, el control efectivo de, al menos, el ochenta por ciento del presupuesto general consolidado del ejercicio mediante la aplicación de las modalidades de función interventora y control financiero. En el transcurso de tres ejercicios consecutivos y en base a un análisis previo de riesgos, deberá haber alcanzado el cien por cien de dicho presupuesto”

A mayor abundamiento, ni que decir tiene que los procesos y sistemas informáticos y electrónicos juegan actualmente un papel fundamental en la administración pública, y ello por mandato expreso de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público; lo cual cabe hacer extensivo al ámbito del control interno, su implementación y sus procesos y procedimientos.

En este orden de cosas sólo cabe aspirar, también afectando al control interno, a que los expedientes se tramiten electrónicamente a través de un gestor de expedientes que cuente con diversas integraciones, entre las cuales se encuentre la integración con el trámite de fiscalización, evitando así que los expedientes se sigan tramitando en formato papel.

Por otro lado, los procedimientos de control interno que vengan a establecerse y que utilicen técnicas de auditoría también necesitarán de los correspondientes aplicativos o módulos específicos para su la tramitación, seguimiento de las pruebas y resultados del control, requerimientos, formularios...etc.

Finalmente, decir en este apartado que, con carácter general, entre las facultades del órgano de control, el artículo 6.1 del RD de control interno le atribuye: *“la facultad de revisión de los sistemas informáticos de gestión”*, lo que se viene interpretando como la atribución que se hace dicho órgano de participar y emitir opinión en los procesos de adquisición renovación, modificación, .etc, de los aplicativos y sistemas informáticos para garantizar que cumplan con todos los requisitos técnicos y legales y sirvan también a los fines de control.

Al hilo de lo expuesto anteriormente, esta Intervención considera que el aplicativo informático que tramita los expedientes electrónicos, a la hora de fiscalizarlos no permite ejercer la función interventora en su integridad y de forma objetiva, ya que no se garantiza la integridad y la inamovilidad del expediente, provocando en muchas ocasiones que se integren en el expediente documentos e informes una vez ha sido fiscalizado por la Intervención.

A estos efectos la integridad del expediente la da el índice que requiere el artículo 70 apartado.2 de la Ley de Procedimiento administrativo, Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que señala que los expedientes tendrán formato electrónico y se formarán mediante la agregación ordenada de cuantos documentos, pruebas, dictámenes, informes, acuerdos, notificaciones y demás diligencias deban integrarlos, así como un índice numerado de todos los documentos que contenga cuando se remita. Asimismo, deberá constar en el expediente copia electrónica certificada de la resolución adoptada. Que, de esta manera, cualquier documento posterior a la fiscalización, si debe integrarse en el expediente, significa que no se remitió completo. En caso contrario no formaría parte del mismo. Esta argumentación ha sido recogida en el Real Decreto 424/2017, de control interno local que, obliga a que los sistemas informáticos se adapten a las nuevas exigencias de control interno en la misma línea que la apuntada por el tribunal de cuentas en la resolución de 24 de abril de 2018 aprobada por la Comisión Mixta para las relaciones con el Tribunal de Cuentas.

Esta argumentación ha sido recogido en el Real Decreto 424/2017, de control interno local, concretamente en el artículo 10 del Real Decreto 424/2017, señala , respecto al momento y plazo para el ejercicio de la *función interventora* :

1. El órgano interventor recibirá el expediente original completo, una vez reunidos todos los justificantes y emitidos los informes preceptivos, y cuando esté en disposición de que se dicte acuerdo por el órgano competente.

2. El órgano interventor fiscalizará el expediente en el plazo de diez días hábiles. Este plazo se reducirá a cinco días hábiles cuando se haya declarado urgente la tramitación del expediente o se aplique el régimen especial de fiscalización e intervención previa regulada en los artículos 13 y 14 de este Reglamento.

*A estos efectos, el cómputo de los plazos citados anteriormente se iniciará el día siguiente a la fecha de recepción del expediente original **y una vez se disponga de la totalidad de los documentos.***

Cuando el órgano interventor haga uso de la facultad a que se refiere el artículo 6.4 se suspenderá el plazo de fiscalización previsto en este artículo y quedará obligado a dar cuenta de dicha circunstancia al gestor.

3. En ningún caso el desarrollo y adaptaciones normativas que realicen las Entidades Locales podrán reducir los plazos establecidos en este artículo.”

El sistema informático actual, gestor de expedientes electrónicos, debe adaptarse para garantizar la integridad y la inamovilidad del expediente, pues se emiten informes jurídicos una vez el expediente está fiscalizado antes de la adopción del acuerdo por decreto o por junta de gobierno, lo que impide la fiscalización completa del expediente y la integridad del mismo, puesto que el informe de fiscalización es preceptivo, y en algunos casos puede llegar a ser suspensivo (artículo 216.2 del Real Decreto legislativo 2/004, de 5 de marzo por el que se aprueba el texto refundido de la ley reguladora de las haciendas locales). Expediente que no puede ser nunca completo si se emiten informes jurídicos posteriores al mismo.

12. De las liquidaciones aprobadas se dará cuenta al Pleno y se remitirán copia de las mismas al órgano competente de la Comunidad Autónoma y del Estado.

Es todo cuanto esta Intervención conviene en informar, sometiéndola de forma inmediata a consideración del órgano competente para aprobar tal liquidación.

Torrent, en la fecha de la firma electrónica del presente documento.

MARIA DEL CARMEN APARISI APARISI

22/03/2019 14:22:15

INTERVENCIO